

125-19.61
Santiago de Cali,

Asunto: Remisión Respuesta de Fondo a Denuncia Ciudadana CACCI 2738 DC-104-2020 del 10/07/20.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales en atención a la denuncia ciudadana interpuesta por usted, y trasladada por el Departamento del Valle del Cauca- Secretaría de Salud Departamental del Valle respecto de la comunicación N° 527259 de fecha 22 de abril de 2020, en el que se informan los siguientes hechos irregulares:

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES, CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, “EVARISTO GARCIA” E.S.E. 1) FALTA DE ELEMENTOS PERSONALES DE PROTECCIÓN (EPP) Y BIOSEGURIDAD PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SALUD FRENTE A LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID19; 2) FALTA DE TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD A LA VEEDURÍA EN CUANTO A MANEJO DE LOS INGRESOS DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID19 Y LOS PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO QUE SE ESTÁN APLICANDO; 3) FALTA DE INSCRIPCIÓN DEL HUV EN EL PROYECTO SOLIDARITY DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS, EL CUAL RECOGE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS MÁS PROMETEDORES PARA EL MANEJO DE LA COVID19; 4) DE OTRA PARTE, SE ADJUNTA OFICIO 000446 DEL 05 DE MARZO DE 2020 DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EN EL CUAL SE RELACIONA LA ESCANDALOSA CIFRA DE VEINTISÉIS (26) INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS POR CORRUPCIÓN EN CONTRA DEL GERENTE IRNE TORRES CASTRO Y OCHENTA Y DOS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS POR CORRUPCIÓN EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE.”

Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 266 del 16 de marzo de 2020, Resolución No. 277 del 17 de marzo de 2020, Resolución No. 287 del 24 de marzo de 2020, Resolución No. 296 del 8 de abril de 2020, Resolución No. 312 del 24 de abril de 2020, Resolución No. 324 del 07 de mayo de 2020, Resolución No. 330 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución N. 339 del 29 de mayo de 2020, por medio de las cuales se suspendieron los términos para los trámites de las denuncias ciudadanas, derechos de contradicción y demás, desde el días 16 de marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.

A través de la Resolución No. 387 del 01 de julio de 2020, se reanudaron los términos para los procesos y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir del **06 de julio de 2020.**



Mediante Resolución N°427 del 23 de julio de 2020, se suspendieron los términos para el día 24 de julio de 2020, reanudándose los mismo el día 27 de julio de 2020.

Una vez recibida la denuncia del asunto, y dentro del término legal establecido, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, mediante documento CACCI 1812 del 28 de julio de 2020, solicitó a los peticionarios ampliar la denuncia en los siguientes términos:

1. *Cuál es el presunto hecho constitutivo de detrimento patrimonial, por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente.*
2. *Informe, si existen irregularidades en la contratación llevada a cabo por el Hospital Universitario del Valle, relacionado con la contingencia originada por el COVID-19, detallando los contratos.*

Se tiene entonces que, los peticionarios el día 24 de agosto de 2020, y en el término establecido remitieron la ampliación de la denuncia, precisando como hechos los siguientes:

“(…) 1) Una primera parte relacionada con los graves antecedentes de corrupción, violencia e inseguridad que debilitaron el control social en el HUV y lo llevaron a presentar una respuesta débil e inadecuada frente a la pandemia de Covid 19. Sin estos antecedentes no es posible comprender los hechos de corrupción que tuvieron lugar ya a partir de la declaración de la pandemia de coronavirus SARS COV 2 por parte de la organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.

2) Una segunda parte relacionada con la falta de elementos de bioseguridad para enfrentar el riesgo biológico que implica el coronavirus SARS COV 2, causante de la enfermedad Covid19, y que afecta a los trabajadores del Hospital. No se entiende cómo es que a pesar de que se asignaron recursos para ello, todavía el suministro de estos elementos siga siendo deficiente y los trabajadores hayan tenido que presentar hasta tutelas para proteger su vida y su trabajo.

Los denunciantes, expresan una posible irregularidad en:

“(…) la OBSTRUCCIÓN DOLOSA a los derechos de participación social de la Asociación de Usuarios y al control social que se debe llevar en la Junta Directiva. De esta forma, se ha eliminado de manera ilegal la veeduría ciudadana en la Junta Directiva del HUV, situación que ha permitido al gerente IRNE TORRES, en asocio con la Secretaria de Salud del Departamento del Valle CRISTINA LESMES, contratar sin los requisitos legales y dar vía libre a la corrupción en la entidad. Adjunto un CD con el expediente completo que demuestra cómo ha sido el actuar ilegal de la Secretaria de salud MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE y su jefe de Participación Social LUZ ADRIANA GÓMEZ FORERO en estos últimos tres (03) años, y cómo se han inventado requisitos y trámites inexistentes para obstruir y eliminar el control ciudadano legalmente obligatorio en el HUV.

(…)

De acuerdo al texto normativo transcrito, existen ciertos contratos que por su importancia presupuestal y estratégica deben ser autorizados por la Junta Directiva del Hospital. Comoquiera que durante dos (02) años y nueve (09) meses esa Junta ha tenido una composición irregular, estos contratos y su autorización no cumplen con los requisitos del estatuto.

(…)

Que mediante ACUERDO 009-19 del 11 de julio de 2019 y RESOLUCIÓN No. GG 2390-19 del 19 de julio de 2019, la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle expidió un nuevo estatuto de la contratación y un nuevo manual de la contratación. Adjuntamos estos documentos. En las sesiones



para aprobar estas decisiones, no estuvieron presentes los representantes de los usuarios, pues la Secretaría de Salud Departamental del Valle no los había nombrado, situación que ya lleva tres años y medio. Obviamente, lo que se buscaba era favorecer indebidamente ciertas líneas de contratación en el HUV excluir y eliminar la veeduría ciudadana y el control social de las asociaciones de usuarios.

(...)

En ese orden de ideas, la obstrucción de la veeduría ciudadana por parte de los señores MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE, IRNE TORRES CASTRO, MARÍA GISLAINNE CERÓN CABRERA (Participación Social HUV) y LUZ ADRIANA GÓMEZ FORERO (Participación Social Secretaría Departamental de Salud del Valle) durante tres (03) años y ocho (08) meses tiene un efecto deletéreo directo sobre la contratación del Hospital Universitario del Valle, pues de hecho estos funcionarios anularon el control social efectivo sobre los procesos contractuales.

Por estas razones, los diferentes hallazgos e irregularidades encontrados por los entes de control en relación a la gestión contractual de la institución hospitalaria HUV fueron facilitados por los citados funcionarios al haber éstos eliminado el control social y la veeduría legalmente obligatorias. Se reitera que la obstrucción de estas personas a la elección de los representantes de los usuarios en la Junta Directiva afectó gravemente la vigilancia en los procesos contractuales del HUV, y por lo tanto, facilitó la celebración de contratos de manera indebida, incompleta y sin los requisitos legales, además de las otras irregularidades encontradas por diferentes organismos de control.

(...)

A pesar de que se al HUV se le asignaron recursos para la compra de elementos de bioseguridad, los trabajadores han venido denunciado la falta constante de estos insumos. Al punto que tuvieron que presentar una Acción de Tutela para proteger su vida y su trabajo, la cual correspondió conocer al Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali bajo el radicado 2020-00102. Igualmente, los trabajadores interpusieron una queja ante la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo por estos hechos. Se aporta copia de los pantallazos y escritos presentados.

(...)

Igualmente, los trabajadores denunciaron que parte de los recursos para la compra de elementos de bioseguridad se había desviado hacia la compra de hamburguesas. Se adjuntan los documentos relacionados con esta denuncia (orden de compra 88303 de marzo 30 de 2020) y el comunicado que se emitió en relación a esta situación. (...)"

Los denunciantes, allegaron la siguiente documentación que fue tenida en cuenta por la Dirección y debidamente valorada:

1. Comunicación Suspensión de Alimentos.
2. Denuncia Ministerio de Trabajo.
3. Orden de compra 88303 de 2020.
4. Procuraduría queja.
5. Tutela interpuesta.

De ese modo, y una vez revisado el contenido de la denuncia ciudadana y sus anexos, el Ente de Control encuentra que, el único contrato referido como irregular y de competencia de la Contraloría Departamental es la Orden de Compra N°88303 de marzo 30 de 2020, puesto que el resto de los hechos narrados, no se logra establecer de acuerdo con el Artículo 69 de la Ley 1757 de 2015 cuáles son los hechos constitutivos de presuntas irregularidades por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente.



Para brindar respuesta de fondo sobre el asunto, se tendrá en cuenta, que, respecto de los presuntos hechos de obstrucción dolosa de los derechos de participación social y veeduría ciudadana, composición irregular de la junta directiva en relación a la autorización en contratación, falta de participación de los representantes de usuarios para la aprobación del manual de contratación y pese a haber sido radicada solicitud de los denunciantes sobre el asunto, por parte de la Dirección operativa de Participación Ciudadana, se oficiará a la Procuraduría General de la Nación, para la verificación de los hechos expuestos, en virtud de las competencias legales.

Respecto del hecho con presunta connotación de tipo fiscal relacionada con la Orden de Compra N°88303 de marzo 30 de 2020, se abordará la respuesta de fondo, realizando un recuento de las actuaciones adelantadas en la Auditoría efectuada a la entidad, así como el Informe Final de la Denuncia DC-49-2020 que sobre el asunto fue emitido.

El Ente de Control, realizó auditoría a la Contratación efectuada como consecuencia de la declaratoria de emergencia acaecida por el COVID-19, y producto de ello, se publicó en la página web de la entidad el informe del asunto, el cual no arrojó presuntos hallazgos frente a la orden de compra mencionada que puede ser consultado en el link: <https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1481/auditorias-realizadas-vigencia-2020/>

Por otro lado, la Contraloría recibió denuncia ciudadana por las presuntas irregularidades, derivadas de la Orden de compra N°88303 del 30 de marzo de 2020, en ese orden de ideas, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, en uso de las facultades, procedió a asignar radicado sobre la misma, la cual quedó identificada con el número DC-49-2020.

Una vez agotadas todos los trámites de recaudo de la información pertinente, se procedió a publicar en la página web de la entidad, y de acuerdo al procedimiento el Informe de Respuesta Final, el cual puede ser consultado en el siguiente LINK: <https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1343/denuncias-tramitadas-durante-las-vigencias-2020-y-2019/>

De dicho informe, se puede extraer lo siguiente:

“Es de precisar que el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. por su calidad de Empresa Social del Estado, y por su naturaleza jurídica, sus actos y contratos se rigen por el derecho privado, Ley 100 de 1993 y los principios que rigen el Estatuto General de la Contratación Pública, indicando esto que la Ley les ha otorgado la facultad de expedir su propio estatuto de contratación.

En ese sentido, es de connotar que el Hospital Universitario del Valle, mediante Resolución N°GG-2390-19 del 19 de julio de 2019, ha dispuesto frente a la contratación lo siguiente:

“(…)

ARTICULO 6o. CUANTIA DE LOS CONTRATOS.

Conforme al Acuerdo No. 009 del 11 de julio de 2019, Estatuto de Contratación vigente, se establece:

MENOR CUANTÍA. *Cuando el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir no supere su valor los dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

MAYOR CUANTÍA. *Cuando el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir, superen los dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

ARTICULO 7o. MODALIDAD Y MECANISMOS DE SELECCIÓN.

Las modalidades de selección que aplicará el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., serán las siguientes:



CONVOCATORIA PÚBLICA:

Corresponden a aquellos procesos contractuales de mayor cuantía, mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que seleccione la propuesta más favorable para la Entidad de conformidad con la evaluación que se realice.

CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el procedimiento en el cual se celebra directamente un contrato en consideración a su naturaleza o cuantía, garantizando el principio de selección objetiva.

Los mecanismos de selección que aplicará el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., en consideración a la cuantía del bien, obra o servicio a contratar, serán los siguientes:

Para los contratos de menor cuantía el HOSPITAL solicitará al menos dos (2) propuestas.

PARAGRAFO 1: Cuando los bienes o servicios a adquirir se requieran de manera urgente y la cuantía no supere los trescientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, se podrá suscribir una orden de compra o una resolución de gasto (Subrayado Fuera del Texto Original)

En ese sentido, es pertinente señalar, que una vez verificada la ORDEN DE COMPRA N°ON-88303 del 30 de marzo de 2020, se tiene que el Hospital Universitario del Valle, contaba con las facultades legales para efectuar dicha contratación, en tanto que, el Estatuto Interno de Contratación faculta al Gerente General de dicha entidad, para que en el evento de presentarse la necesidad de adquirir bienes o servicios que se requiriera de manera urgente y la cuantía no supere los 300 SMLMV, éste podrá efectuarlo mediante orden de compra o resolución de gasto, tal como aquí aconteció.

Así mismo, es importante tener presente que por ser el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. de categoría Especial, y uno de los más importantes a nivel departamental y nacional, éste por el flujo de pacientes que maneja, se encuentra frente a la pandemia en un alto grado de exposición en relación al CORONAVIRUS, indicando ello, que así mismo, el personal que brinda apoyo, entiéndase personal de la salud, personal administrativo y demás se encuentran en línea de exposición directa frente al CORONAVIRUS, indicando ello, que las medidas adoptadas por el HUV, son acordes de acuerdo con la problemática que vive el país.

Es de precisar también, que de forma específica la Subgerente Administrativa del Hospital Universitario del Valle, dio a conocer al Gerente, que los restaurantes aledaños a la entidad se encontraban cerrados, y teniendo presente que éstos funcionarios y/o colaboradores, tiene que soportar largas horas de trabajo, así como contacto directo o relacionado con pacientes de COVID-19, se hacía incluso necesario dicha contratación, sumado a que legalmente el estatuto de contratación le permite al Gerente contratar.

Es de vital importancia también esgrimir que, el Hospital Universitario del Valle, según los certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, contaba con un rubro denominado "ALIMENTACIÓN" por lo que indica que tenía la apropiación indicada para cumplir con dicho fin de la contratación estatal.

Por otro lado, éste Despacho del análisis de la información, no evidencia que exista mérito para proceder al traslado de la Dirección Operativa de Control Fiscal, toda vez que, con la documentación allegada por el sujeto de control, así como la directamente recaudada por la Directora Operativa de Participación Ciudadana, se colige que; i) La entidad presentó la necesidad de la contratación, realizó cotizaciones, analizó los antecedentes del contratista, ii) Contó con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal- Registro Presupuestal que soportara la contratación, iii) suscribió la orden de compra iv) recibió los refrigerios contratados v) los refrigerios fueron debidamente entregados al personal, lo anterior en virtud a la documentación entregada a este ente de control, y partiendo del principio de la buena fe que rigen las actuaciones administrativas, y todo ello, permite concluir que no se evidencian situaciones irregulares derivadas de la orden de compra denunciada.

Sumado a lo anterior, no se desprende que pueda existir algún tipo de irregularidad que se derive en un presunto detrimento patrimonial, para ello es menester tener presente que lo



esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLE, que respecto a ello ha expresado:

“(…)

RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]. (...)”

Todo lo anterior, le permite concluir a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle, que la orden de compra referida como irregular, se encuentra ajustada al Estatuto de Contratación Interna de la Entidad. (...)”

Expuesto lo anterior, es pertinente mencionar que frente al hecho irregular de “**FALTA DE ELEMENTOS PERSONALES DE PROTECCIÓN (EPP) Y BIOSEGURIDAD PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SALUD FRENTE A LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID19**”, la Contraloría Departamental del Valle, mediante oficio CACCI 3371 del 26 de agosto de 2020, recibió documento en el cual el Gerente del hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, expone la preocupación ante la Secretaría de Salud Departamental, y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Viceministerio de Salud Pública Ministerio de Salud y protección Social, respecto de la falta de medicamentos e insumos vitales en el Hospital.

Que este ente de Control, mediante oficio CACCI 2541 del 04 de septiembre de 2020, solicitó ante la Secretaría de Salud Departamental, información relacionada con el asunto, debido a la preocupación aducida.

Que una vez se obtengan los resultados, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, procederá a informarle la situación respecto del CACCI 3371 del 26 de agosto de 2020, con el objetivo de los peticionarios conozcan de dicha actuación.

Así mismo, es menester indicar que el alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, indicando que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por la Ley. (Art. 267° de la Constitución Política Colombiana, Acto Legislativo N°04 de 2019, Decreto 403 de 2020 Artículo 1 y 2).

También es pertinente recalcar, que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la



República en materias específicas. (Art. 267° de la Constitución Política Colombiana, Acto Legislativo No. 04 de 2019 Decreto 403 de 2020).

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana CACCI 2738 **DC-104-2020** del 10/07/20 la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.

Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control Hospital Universitario del Valle, con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificada.


Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias, por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la acción de competencia fiscal.

Cordialmente,

Martha I. Gutiérrez

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana

Copia: DC-104-2020
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co
Gobernadora Departamental del Valle: clroldan@valledelcauca.gov.co / contactenos@valledelcauca.gov.co / amurillo@valledelcauca.gov.co
María Cristina Lesmes- Secretaria de Salud Departamental del Valle mclesmes@valledelcauca.gov.co
Unidad de atención Ciudadana del Congreso de la República: atencionciudadanacongreso@senado.gov.co
secretaria.general@camara.gov.co
Emérito Montes: emerito.montes@camara.gov.co
Entidad sujeto de Control: Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” pqrslf@huv.gov.co

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sara Natalia León Scarpeta	Profesional Universitaria	
Revisó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Aprobó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

